

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO**



**JUZGADO VEINTINUEVE ADMINISTRATIVO
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C. - ORAL
SECCIÓN SEGUNDA**

Bogotá, D. C., veintiséis (26) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

PROCESO	1100133350292017-000111-00
DEMANDANTE	CEFERINO BRIÑEZ GONZÁLEZ
DEMANDADA	PERSONERÍA DE BOGOTÁ
MEDIO DE CONTROL	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

I. ASUNTO

Procede el Despacho a resolver la petición presentada por la apoderada judicial de la entidad demandada, por medio de la cual solicita se aclare a quien debe realizar el pago de las condenas impuestas en el fallo de segunda instancia.

II. ANTECEDENTES

1.- Mediante sentencia de primera instancia de fecha 30 de octubre de 2019, este Despacho judicial declaró la nulidad de la Resolución 890 del 23 de septiembre de 2016, proferida por la Personería de Bogotá, y como consecuencia de ello, a título de restablecimiento del derecho, condenó a la Personería de Bogotá, a reintegrar al señor Ceferino Briñez González, al cargo denominado profesional especializado código 222, grado 07, hasta que se demuestre su inclusión en nómina de pensionados, a cancelar los salarios y demás prestaciones sociales dejados de percibir entre el 1° de octubre de 2016 y el 4 de diciembre de 2016, incluyendo la Prima Técnica y la Prima de Antigüedad, que venia devengando el accionante antes de su retiro, asimismo, la demandada deberá cancelar el excedente resultante de

la diferencia entre lo devengado en el cargo denominado Profesional Especializado Código 222 Grade 06 y el Profesional Especializado Código 222 Grado 07.

2.- Decisión que fue apelada por la entidad demandada y modificada en segunda instancia por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en sentencia de fecha 14 de febrero de 2023, en los siguientes términos:

“PRIMERO: MODIFICAR el NUMERAL SEGUNDO de la sentencia proferida el 30 de octubre de 2019 por el Juzgado Veintinueve (29) Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá D.C., el cual quedará así:

SEGUNDO: Como consecuencia de la declaración de nulidad y a título de restablecimiento del derecho, **CONDENAR a la PERSONERÍA DE BOGOTÁ D.C., así:**

i) al pago de los salarios y demás emolumentos que percibía el señor CEFERINO BRÍÑEZ GONZÁLEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 2.283.870 de Chaparral - Tolima como Profesional Especializado, Código 222, Grado 07 desde la fecha de retiro, 1° de octubre de 2016, hasta el día 11 de enero de 2017, incluyendo la prima técnica que percibía en dicho empleo,

ii) Desde el 12 de enero de 2017 hasta el 7 de abril de 2021, (fecha del deceso) lo devengado por un Profesional Especializado, Código 222, Grado 06, incluida la prima técnica, en los porcentajes que correspondan.

iii) Se deberán deducir las sumas percibidas por el señor CEFERINO BRÍÑEZ GONZÁLEZ en esos interregnos, teniendo en cuenta el reintegro efectuado por orden de tutela mediante la Resolución No. 1018 del 15 de diciembre de 2016, al cargo de Profesional Especializado, Código 222, Grado 06, conforme lo expuesto en la parte motiva.

iv) El reconocimiento se realizará a favor de la sucesión del señor CEFERINO BRÍÑEZ GONZÁLEZ a la cual la entidad demandada deberá

efectuar el pago de los valores que le corresponderían al accionante hasta el día de su deceso.

SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia proferida el 30 de octubre de 2019 por el Juzgado Veintinueve (29) Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá D.C., por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: RECONOCER a la señora **SANDRA YOHANA DÍAZ TORRIJOS** identificada con C.C. No. 52.063.716 de Bogotá D.C., como **sucesora procesal del demandante**, señor **CEFERINO BRIÑEZ GONZÁLEZ** (q.e.p.d.), conforme lo expuesto”.

3.- A través de escrito presentado el día 11 de octubre de 2023, la apoderada judicial de la Personería de Bogotá, solicita se aclare, a quien deben efectuar el pago de las condenas impuestas en el fallo de segunda instancia, en razón a que para la entidad no existe claridad, pues, por un lado, se reconoció la sucesión procesal en favor de la señora Sandra Yohana Díaz Torrijos, y posteriormente, el señor Justiniano Briñez González, radica petición ante la entidad, indicando que es el hermano del fallecido demandante señor Ceferino Briñez González.

CONSIDERACIONES

✓ Aclaración de la sentencia

El artículo 285 del Código General del Proceso, aplicable por remisión expresa del artículo 306 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, señala:

«**ARTÍCULO 285. ACLARACIÓN.** La sentencia no es revocable, ni reformable por el juez que la pronunció. Sin embargo, podrá ser aclarada, de oficio o a solicitud de parte, cuando contenga conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, siempre que estén contenidas en la parte resolutive de la sentencia o influyan en ella.

En las mismas circunstancias procederá la aclaración de auto. La aclaración procederá de oficio o a petición de parte formulada dentro del término de ejecutoria de la providencia. La providencia que resuelva sobre la aclaración no admite recursos, pero dentro de su ejecutoria podrán interponerse los que procedan contra la providencia objeto de aclaración».

De acuerdo con el principio de seguridad jurídica, la sentencia es inmodificable **por el mismo juez que la profirió**, lo que significa que una vez se emite la decisión judicial el juez pierde competencia para pronunciarse sobre el asunto definido. Sin embargo, el juez de manera excepcional está facultado para aclarar la sentencia, de oficio o a solicitud de parte, **sólo cuando en ella se observen “conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda”**, siempre que dichas frases “estén contenidas en la parte resolutive de la sentencia o influyan en ella”.

Así, la aclaración de la sentencia se torna en un instrumento conferido a las partes y al juez, para dar claridad y explicación sobre conceptos o frases provenientes de una redacción que dificulta el entendimiento de la sentencia; conceptos de difícil comprensión que son relevantes en la decisión, pues integran la parte resolutive de la sentencia o inciden en ella. No obstante que la ley faculta al juez para el ejercicio de esa potestad, ello no significa que, al aclarar la decisión, el juez pueda revocarla o reformarla.

Descendiendo al caso concreto, advierte este Juzgado, que la solicitud de aclaración de la sentencia proferida el 14 de noviembre de 2023, no está llamada a prosperar por las razones que a continuación se explican:

1.- La sentencia cuya aclaración se solicita fue emitida por el Juzgador de segunda instancia, es decir, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, lo cual de entrada hace que este Juzgador de primera instancia, no tenga competencia para

aclarar la citada providencia, como quiera que la sentencia solo puede ser aclarada por el juez que la profirió.

2.- De la lectura del fallo de segunda instancia, no se evidencia que la misma contenga conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, habida cuenta lo siguiente:

La sucesión procesal, es la figura por medio de la cual una de las partes procesales es reemplazada totalmente por un tercero que toma el litigio en el estado en que se halle al momento de su intervención¹. Al sucesor se le transmite o transfiere² el derecho litigioso convirtiéndose en el nuevo legitimado para obtener una sentencia de mérito, ocupando la posición procesal de su antecesor³.

Al respecto, dispone el artículo 68 del Código General del Proceso aplicable por integración normativa al procedimiento administrativo, que *“fallecido un litigante o declarado ausente o en interdicción, el proceso continuará con el cónyuge, el albacea con tenencia de bienes, los herederos o el correspondiente curador”*.

Frente a este tema, la Sección Tercera del Consejo de Estado, a través de sentencia del 10 de marzo de 2005, con ponencia del Dr. Ramiro Saavedra Becerra, con el expediente radicado bajo el No. 50001-23-31-000-1995-04849-01 (16346), ha indicado:

“El sucesor queda con los mismos derechos, cargas y obligaciones procesales que su antecesor. La sucesión procesal no entraña ninguna alteración en los

¹ De conformidad con el artículo 62 del Código de Procedimiento Civil “Los intervinientes y sucesores de que trata este Código, tomarán el proceso en el estado en que se halle en el momento de su intervención”.

² Según la doctrina la palabra transmitir se encuentra reservada para actos mortis causa y el vocablo transferir denota actos entre vivos. Al respecto ver: BONIVENTO FERNÁNDEZ, José Alejandro, Los Principales Contratos Civiles y su Paralelo con los Comerciales, Librería Ediciones del Profesional Ltda., Bogotá, 2004, pp. 5 a 6.

³ Consejo de Estado, Subsección C de la Sección Tercera, auto del 24 de abril de 2013, exp. n° 45982, C.P. Olga Melida Valle De De La Hoz

restantes elementos del proceso. Por ser un fenómeno de índole netamente procesal, tampoco modifica la relación jurídica material, que, por tanto, continúa igual, correspondiéndole al funcionario jurisdiccional pronunciarse sobre ella como si la sucesión procesal no se hubiese presentado.”

Ahora, si bien la sucesión procesal permite dar continuidad al trámite judicial, quien comparezca al trámite acudiendo a esa calidad, en remplazo de la parte extinta, no sólo obra en su nombre, sino en representación también de todas las personas con igual condición.

Así entonces, cuando un sucesor procesal reclama el pago de una sentencia por la vía ejecutiva, el mandamiento de pago no se libra en su nombre, sino en favor de los herederos del titular del derecho, toda vez que una vez fallecido éste **la obligación a cargo del deudor se convierte en un activo objeto de adjudicación a sus sucesores dentro del trámite herencial notarial o judicial.**

Al respecto, la Sala de Casación Laboral en la sentencia STL8848 de 2014 señaló:

"Con todo, se observa que el Juzgado se abstuvo de entregarle a la accionante los dineros depositados a favor del señor Andrés Torres Lorenzano, argumentando que al haber fallecido en el curso del proceso «los dineros (...) empezaron hacer parte de la masa herencial como activo», y que «si bien se encuentra debidamente acreditada la calidad de compañera permanente de la señora CLARA NELLY LOAIZA, desde el proceso ordinario, (...) esto no es óbice para convertirla en acreedora de los mismos, porque como ya se enunció, estaríamos en contravía de las prerrogativas que le asisten a los herederos».

En ese orden, aun cuando se analizara de fondo la situación aquí planteada, se impondría concluir que la providencia reprochada es el resultado de una labor hermenéutica propia del operador judicial que la profirió, en la medida que actuó bajo criterios mínimos de razonabilidad a la luz del hecho sobreviniente planteado y con referencia en las normas legales aplicables al tema debatido, motivo por el

cual no denota arbitrariedad alguna o defecto que por su envergadura, imponga la intervención del juez constitucional.

En efecto, si en el curso del proceso, el reclamante fallece, en atención a la transmisión a sus herederos, son éstos los llamados a sucederle en el mismo, junto con la cónyuge sobreviviente o compañera permanente, el albacea con tenencia de bienes o el correspondiente curador, de acuerdo a lo estatuido en el artículo 60 del CPC, aplicable al rito laboral por remisión expresa del artículo 145 del CPT. y de la S.S.

De tal manera que, si el Juzgado se abstuvo de entregarle a la accionante el título de depósito judicial, fue por el nuevo hecho que surgió en el proceso, circunstancia que no solo la afecta a ella, sino también a otros posibles herederos del ejecutante, respecto de quienes, se desconoce su existencia, pues no aparecen acreditados los elementos necesarios para determinar esos causahabientes y su derecho conforme a la ley.

De lo anterior se deriva, que con la muerte del señor Ceferino Briñez González, las acreencias laborales reconocidas dentro del presente proceso ordinario pasó a integrar la masa hereditaria de acuerdo con el artículo 1012 del Código Civil, según el cual "*la sucesión en los bienes de una persona se abre al momento de su muerte en su último domicilio, salvo los casos expresamente exceptuados*", por lo cual también en ese momento a los herederos se les defirió la herencia, de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 1013 del mismo código.

Por lo tanto, sólo cuando se realice la partición dentro de la sucesión del causante, podrá establecerse qué bienes corresponden a cada heredero, y al cónyuge o compañero permanente según corresponda, o si a ello hubiere lugar, según sus respectivos derechos, y, específicamente, a quién o quiénes se le asignará el crédito que pretende cobrarse ejecutivamente, y en qué proporción, pues es bien sabido que la concurrencia de varios herederos, produce al fallecimiento del causante un estado de indivisión respecto de los bienes que comprenden la masa

hereditaria. Teniendo en cuenta, entonces, que los solicitantes requieren hacerse con la sucesión procesal de un crédito que, por el hecho de la muerte del demandante, se incorporó automáticamente a su masa hereditaria, debe relacionarse tal crédito dentro del inventario de bienes relictos de la sucesión, para que sea objeto de división, luego de lo cual, el adjudicatario o adjudicatarios del mismo sí estarían legitimados para reclamar a título personal los frutos derivados de la acción, máxime cuando con la misma solicitud se reconoce que no la totalidad de los herederos concurren al trámite, por lo cual con una indebida asignación en esta vía judicial, pudieren afectarse derechos personales de personas ajenas al proceso.

En esta misma línea, el H. Consejo de Estado, en providencia del catorce (14) de septiembre de dos mil veinte (2020), Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ y Radicación: 11001 03 15 000 2020 03321 00, indicó:

*“... Como regla general, para suceder al causante, **se requiere capacidad para suceder y vocación sucesoral**, esta última, entendida como la situación jurídica que adquiere un sujeto en la relación sucesoria de un difunto determinado, permitiéndole ser su sucesor por causa de muerte.*

La fuente de la vocación sucesoral corresponde al testamento o a la ley; cuando el llamamiento a suceder opera por mandato de la ley su presupuesto básico es el parentesco, es decir, los nexos de parentesco son los que ligan a los herederos con el causante, y aquel se demuestra con la prueba del estado civil correspondiente.

*Ahora bien, **conviene precisar que no se puede confundir el estado civil de la persona llamada a suceder a otra por causa de muerte, con el título de heredero que le otorga la vocación sucesoral y la aceptación expresa o tácita de la herencia...**” (negritas fuera del texto)*

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, la figura de sucesión procesal no se equipara, a la sucesión hereditaria, por cuanto la primera pretende la

representación de los intereses del fallecido durante la duración de un proceso judicial a través de sus herederos, sin que sea posible que estos tengan derecho en forma directa de las sumas de dinero objeto de condena que le hayan correspondido al causante dentro del proceso judicial, puesto que, solo tendrían derecho a disfrutar de esas sumas de dinero, en el evento que haya una sucesión hereditaria contenciosa o voluntaria que así lo disponga, y que se acepte de forma expresa o tácita la herencia.

En consecuencia, tal y como lo ordenó el juzgador de segunda instancia en el literal **iv)** de la parte resolutive del fallo, el pago de los valores que le corresponderían al accionante hasta el día de su deceso, deberá realizarse **“a favor de la sucesión del señor CEFERINO BRÍÑEZ GONZÁLEZ”**

Pues no es posible ordenar la entrega de una suma a favor de un sucesor procesal, pues de ello ser así, se estarían desconociendo los órdenes hereditarios⁴, sin que el juez administrativo, sea el competente para establecer que otras personas tienen o no la calidad de herederos, asunto que debe ser ventilado en otro

⁴ Recordemos los artículos del Código Civil que establecen el orden hereditario y según los cuales:

1. **Artículo 1045. Primer orden hereditario** - los hijos. Los hijos legítimos, adoptivos y extramatrimoniales, excluyen a todos los otros herederos y recibirán entre ellos iguales cuotas, sin perjuicio de la porción conyugal.

2. **Artículo 1046. Segundo orden hereditario** - los ascendientes de grado más próximo. Si el difunto no deja posteridad, le sucederán sus ascendientes de grado más próximo, sus padres adoptantes y su cónyuge. La herencia se repartirá entre ellos por cabezas.

No obstante, en la sucesión del hijo adoptivo en forma plena, los adoptantes excluyen a los ascendientes de sangre; en la del adoptivo en forma simple, los adoptantes y los padres de sangre recibirán igual cuota.

3. **Artículo 1047. Tercer orden hereditario** - hermanos y cónyuge. Si el difunto no deja descendientes ni ascendientes, ni hijos adoptivos, ni padres adoptantes, le sucederán sus hermanos y su cónyuge. La herencia se divide la mitad para éste y la otra mitad para aquéllos por partes iguales. A falta de cónyuge, llevarán la herencia los hermanos, y a falta de éstos aquél. Los hermanos carnales recibirán doble porción que los que sean simplemente paternos o maternos.

4. **Artículo 1051. Cuarto y quinto orden hereditario** - hijos de hermanos - ICBF. A falta de descendientes, ascendientes, hijos adoptivos, padres adoptantes, hermanos y cónyuges, suceden al difunto los hijos de sus hermanos. A falta de éstos, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

escenario. Cosa diferente, se insiste, es que la sucesora tenga legitimación en la causa por activa para solicitar que se continúe con el trámite del proceso ejecutivo.

En mérito de lo expuesto el Despacho,

RESUELVE

PRIMERO: Negar la solicitud de aclaración de la sentencia de 15 de noviembre de 2023, propuesta por la Personería de Bogotá, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Ordenar estarse a lo resuelto en el literal **iv)** del fallo de segunda instancia emitido el 14 de febrero de 2023, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que ordenó el reconocimiento y pago de las acreencias laborales que le corresponderían al accionante hasta el día de su deceso "*a favor de la sucesión del señor CEFERINO RÍÑEZ GONZÁLEZ*".

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Enrique Arcos Alvear', with a stylized, somewhat abstract form.

ENRIQUE ARCOS ALVEAR
JUEZ

**JUZGADO VEINTINUEVE ADMINISTRATIVO
ORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ
SECCIÓN SEGUNDA**

Por anotación en **ESTADO** notifico a las partes la providencia anterior

Hoy 27 de octubre de 2023 a las 8:00 a.m.

PARTES	CORREOS ELECTRÓNICOS
DEMANDANTE:	Oscarlopeza.abogado@gmail.com Mariajosediaz91@hotmail.com j.brinez.g@gmail.com
DEMANDADA:	parojas@perosneriabogota.gov.co buzonjudicial@personeriabogota.gov.co
MINISTERIO PÚBLICO: PROCURADOR 191 JUDICIAL PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	Procjudadm191@procuraduria.gov.co